



Diego Paulsen, expresidente
Cámara de Diputados

“No podemos permitir que desarmen a la sociedad civil”

Por Lenka Carvallo

“No me arrepiento”, señala el ex diputado de RN, Diego Paulsen, desde su oficina en Temuco, mientras sus mellizos de 6 años dan vueltas alrededor.

Ya son casi tres meses lejos de la actividad parlamentaria, desde que este abogado decidiera restarse de una segunda reelección, tras dos períodos representando al distrito 22 por su tierra natal.

Ahora sus días comienzan en su casa en el sector urbano de Temuco con su mujer Valentina García, sus mellizos Diego y Clara (6 años) y Domingo (9 meses).

“Me levanto y antes de salir a trabajar trato de ayudar en lo que puedo en la casa. Luego paso a dejar a mis niños al colegio y me instalo en la oficina o voy al campo. Hoy los mellizos no tuvieron clases así que me los tuve que traer para acá, por eso el caos”, explica mientras uno de ellos hace sonar la campana con que hasta marzo de este año el militante RN inauguraba las sesiones de la Cámara, como el legislador más joven en presidir la institución.

Paulsen ingresó al Congreso a los 25 años como diputado, junto a Gabriel Bo-

“El anuncio del Presidente nos llena de angustia. ¿Cómo nos vamos a defender si vienen a matarnos, pretenden que los enfrentemos con piedras?”, dice el exparlamentario por la Araucanía, quien reconoce que dormía armado ante los ataques al fundo familiar que en febrero terminaron en pérdida total. “La ausencia del Estado es tal que nos obliga a tener armas”.

ric (CS), Giorgio Jackson (RD), Camila Vallejo (PC), Karol Cariola (PC), Jaime Bello- lio (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), entre otros miembros de la nueva generación política. Entretanto se casó, nacieron sus tres hijos, y la actividad política lo fue absorbiendo. El punto de inflexión, que lo llevó a dejar su cargo, fue tras su primera reelección, luego de trabajar intensamente en la campaña de segunda vuelta de Sebastián Piñera. “Un poco antes de Navidad me fui a mi casa en Temuco, pero quise insertarme en la vida familiar y mis niños no me reconocían; para ellos no era su papá. Eso me marcó y me llevó a poner las cosas sobre la balanza”.

—Ahora está recuperando el tiempo perdido.

—No, eso no se recupera nunca...

—Y la relación de pareja también se resiente.

—Por supuesto. Cuando pasas 5 o 6 días fuera de la casa, se pierde tiempo muy preciado para la construcción del matrimonio. Por eso le agradezco mucho a la Vale, una tremenda mujer, mamá y mi compañera de ruta. Además porque muchas veces tuvimos que aguantar la crítica desmedida, algunas veces descabellada,

de nuestros grupos más cercanos, como los amigos e incluso de la familia, lo que va resintiendo las relaciones en tu entorno más cercano. Ahora estoy feliz”.

Hoy junto a su mujer administran un *stay and play*. “Una cafetería bien chora, donde los niños van a jugar y que creó mi señora en 2019”, cuenta. También retomó su profesión, con asesorías legales a empresas y lidera una fundación que busca nuevos liderazgos para la construcción de políticas públicas.

“Aquí hay una violencia de otro nivel”

Diego Paulsen proviene de migrantes daneses que llegaron a Chile hacia fines de 1800 y se radicaron en Temuco. Luego desarrollaron el fundo El Porvenir, en la zona de Galvarino (Novena Región). En 1928 levantaron una gran casona familiar sobre una extensión de 800 hectáreas dedicadas a la producción agrícola y forestal, que con el tiempo llegó a sumar las 2 mil hectáreas. Ahí vivía sola Nanny Naulin, abuela de Paulsen.

En febrero de este año, la casa resultó con pérdida total luego de un incendio que el abogado calificó como intencional, aunque en el momento fue descartado

por la Fiscalía.

“Mi abuela se acostaba todas las noches pensando que le podía pasar algo, ahora ya está bien, se vino a vivir a Temuco y dio vuelta la página”, comenta.

Y sobre el caso, señala: “Partió como un incendio forestal que pudimos controlar en un par de días. Pero le prendieron fuego a otra parte del campo, luego a un galpón, hasta que finalmente hubo otro incendio forestal que llegó a 20 metros de la casa; las llamas saltaron sobre el techo y se perdió todo, no quedó nada, ni una lata... Pero esto es lo que viven miles de personas... Hace unos días una niña de 3 años fue maniatada junto a su abuela, su papá y tres de sus animales acribillados, entre ellos una yegua que estaba por parir. Aquí hay un nivel de violencia de otro nivel... Ocupaciones territoriales donde hay grupos de interés que controlan áreas determinadas y si no estás con ellos te sacan a balazos o en un cajón si es necesario. Todos los días hay al menos tres atentados”.

Fue el 2009 que la familia vivió el primer ataque. “Pensamos que eran grupos pequeños y aislados dentro de la zona —cuenta—. Pero en el 2014, cuando entré a la política, las agresiones aumentaron; llegamos a tener más de 40 hechos de violencia en menos de cincuenta días”.

El fundo permaneció con resguardo policial nocturno, Paulsen tuvo que andar con escoltas permanentes y se querelló contra los grupos que solían amenazarlos.

—Entiendo que en el 2014 se enfrentó a tiros con violentistas y en una entrevista contó que dormía armado.

—Llega a un punto en que tienes que estar dispuesto a defender lo tuyo; es tan duro lo que estás viviendo... Sabes que son personas que están dispuestas a todo, incluso a quemarte vivo, como ocurrió con el matrimonio Luchsinger McKay... En la Araucanía se vive en otro mundo respecto de los niveles de violencia, comparable con las bandas de narcotraficantes que vemos en Santiago. Aquí la ausencia del Estado es tal que la realidad te obliga a tener armas de defensa personal.

—En su cuenta pública el Presidente Boric anunció que enviará un proyecto de ley para la “prohibición total de tenencia de armas y la limitación radical de su acceso legal”. ¿Qué le parece?

—Es una política que nos llena de angustia. ¿Cómo nos vamos a defender si es que llegan a matarnos o a quemarnos vivos, acaso quieren que los enfrentemos piedras? No podemos permitir que desarmen a la sociedad civil. Nosotros hemos hecho los cursos de tiro, tenemos los papeles en orden, adquirimos todo legalmente. El esfuerzo debiera estar puesto en los que nos están declarando la guerra y no en quienes queremos vivir en paz. El Estado debe hacerse cargo de brindarnos seguridad. Tampoco creo que funcione la política anunciada por el gobierno de ampliar la adquisición de tierras por parte de la Conadi. Sólo traerá más violencia.

—¿Por qué?

—La ley dice que debe existir un te-

rreno en conflicto y así conseguir la aplicabilidad para que las comunidades sean beneficiadas. El incentivo de centrar este conflicto sólo en compra de tierras incide en que algunos, acostumbrados a la violencia, la ejerzan para obtener resultados.

Molesto, agrega:

—Esta situación empeora cuando ves que algunos en la clase política no condenan estos hechos y lo asimilan a acciones de ‘recuperación territorial’, como si fuera una consigna que les da derecho a destruir y matar para conseguir sus ‘reivindicaciones’. Cuando una ministra, como Jeanette Vega, o el presidente de un partido de la coalición, como Guillermo Teillier, hablan de “presos políticos” es indignante... Me gustaría que conversaran con la señora del cabo Nain, con los hijos de la familia Luchsinger McKay o la señora de Juan Barrios y les dijeran a su cara que justifican las muertes por una causa política.

—¿Cómo describiría a estos grupos y sus objetivos?

—Son grupos radicalizados que operan para tener controles territoriales, impulsados por diferentes fines: robo de madera, narcotráfico, ocupación territorial o generar autonomías en algunas zonas y para ello quemar las escuelas o impiden censar de manera de que el Estado no llegue, se ausente y así se le responsabilice de todo... Acá hay grupos de interés a los que les conviene que el conflicto siga.

—¿A quiénes se refiere?

—Al PC, concretamente. Ellos tienen una gran injerencia en la Araucanía, con un discurso ligado a los supuestos presos políticos. Cuando hay una huelga de hambre son los primeros en aparecer; o son los que piden beneficios carcelarios. Esto les permite réditos políticos.

—De acuerdo a la encuesta Cadem del 23 de mayo, un 76% piensa que hay terrorismo en la zona... ¿Son sostenibles esos réditos?

—No en nuestra región, pero el PC ha hecho creer que estos movimientos radicales están luchando por la causa de los pueblos originarios. Eso es lo que se vende hacia afuera... No ha existido la capacidad de transparentar lo que ocurre acá y, muchas veces, cuando quieres hablar del tema en los medios, no les interesa porque ‘enfrian la pantalla’. Ya no es noticia que quemen 10 camiones o hayan maniatado a una niña de tres años. Los grupos radicales ganaron la campaña comunicacional en la zona central.

—En la cuenta pública, el presidente también anunció la extensión del Estado de Excepción. Eso, a pesar de que muchas veces estuvieron en contra.

—Valoro esa transformación. El Presidente traspasó las barreras de su propia coalición buscando las mayorías para construir un proyecto político, algo que se vio a partir de la segunda vuelta. Pero la mitad de su coalición se quedó en lo expresado en la primera vuelta. Ellos han relativizado la violencia, avalándola como método de acción política. Hay un enfrentamiento ideológico dentro del gobierno.



Ya no es noticia que quemen 10 camiones o hayan maniatado a una niña de tres años. Los grupos radicales ganaron la campaña comunicacional en la zona central”.



El principal violentista dentro de la Araucanía es el propio Estado, por el abandono que ha tenido con la región, por llegar tarde con políticas públicas y no ser capaces de entender la multiculturalidad que vivimos”.

El subsecretario Monsalve y el presidente Boric han sido muy pragmáticos en la búsqueda de soluciones y en dar señales claras, algunas veces tarde, como el Estado de Excepción, que dictaron recién a los tres meses de haber asumido.

—Según dijo Monsalve en una entrevista con La Tercera, el anterior gobierno tardó tres años...

—Quiero ser muy claro: el gobierno de Sebastián Piñera fracasó en la Araucanía. Siempre confié en que lo que estaba haciendo el ministro Moreno era lo correcto, que había que recomponer confianzas, dialogar. Pero fallaron en todos sus intentos y, efectivamente, nos demoramos tres años en decretar Estado de Excepción. Tiene razón el subsecretario Monsalve. Fracasamos porque no fuimos capaces de generar una política pública real respecto de la deuda del Estado con los pueblos originarios. Fracasamos porque no hubo capacidad para determinar cuántas son las aplicabilidades de los títulos de Merced que aún no se han devuelto a nuestros pueblos. Fracasamos en las políticas de seguridad al no brindarle a Monserrat o Juan Barrios la posibilidad de salvar su vida, o darle el apoyo a Carabineros para que no perdiera la vida el cabo Nain o los prefectos de la PDI que entraron a Temucoicui. Cuando los gobiernos no brindan las condiciones necesarias a nuestras fuerzas de orden y seguridad para que restablezcan el Estado de Derecho, se van quedando sin herramientas para enfrentar a estos grupos que han ido copando el territorio de la Araucanía y el Biobío. En todo eso fracasamos, pero no por eso vamos a decir a mal de muchos, consuelo de tontos. El principal violentista dentro de la Araucanía es el propio Estado, por el abandono que ha tenido con la región, por llegar tarde con políticas públicas y no ser capaces de entender la multiculturalidad que vivimos. Ya no creemos en las buenas intenciones sino que en hechos concretos.

—¿Ve alguna salida real a la escalada violentista en la región?

—Necesitamos un acuerdo político transversal, similar al del 15 de noviembre (por la paz y la nueva Constitución). A eso debíamos apostar. Este es un problema social y político, por lo tanto, la solución debe provenir desde la clase política, e involucrar a alcaldes, consejeros regionales, concejales, así como representantes de la sociedad civil que actúen como garantes ante las demandas de los pueblos originarios. No se puede separar los delitos y atacar la criminalidad sin darles una respuesta. Y si un acuerdo así se firma, todos deben condenar públicamente estos delitos y crímenes; que se persigan y que cuando se detenga a quienes le han declarado la guerra al Estado o hayan matado a gente, robado madera o tengan a miles de niños metidos en el narcotráfico, no los cataloguen como presos políticos sino como delincuentes que deben pagar con penas efectivas de cárcel, sin beneficios.